



Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Compartir bajo la Misma Licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Seguridad social para las trabajadoras sexuales: Cotización pensional, acceso y garantías legales.

Social security for sex workers: pension contribution, access and legal guarantees.

Diana Constanza Capera Tole¹

Resumen

El trabajo sexual ha sido tachado de inmoral por parte de la sociedad a lo largo de la historia, lo cual ha hecho que los perjuicios sociales eviten una evolución normativa concreta que permita regular las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, quienes tienen un futuro pensional incierto, dado que la “clandestinidad” en que la mayoría ejerce dicho oficio genera una incertidumbre y si en muchos casos no están vinculadas al sistema de salud, es casi nula la probabilidad que accedan al sistema de seguridad social en pensiones, ya sea el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o el Régimen de Prima Media, es por ello que con la elaboración del presente trabajo de grado se busca establecer a que garantías legales pueden acceder las trabajadoras sexuales, analizando la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha tratado las condiciones laborales de esta población, de igual manera se busca analizar y establecer los métodos que podrían usar para que en un futuro puedan acceder a una pensión de vejez, este tipo de población que tiende a permanecer es gran parte en estado de vulnerabilidad.

En cuanto a la protección de derechos básicos de este tipo de trabajadoras, es pertinente realizar un estudio analítico de disposiciones emitidas por altos tribunales como la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para así adquirir un concepto más amplio sobre la debida protección con relación a la seguridad social de las personas dedicadas a los servicios sexuales.

Abstrac

Sex work has been branded as immoral by society throughout history, which has caused social damages to avoid a concrete normative evolution that allows regulating the

¹ Estudiante del programa de Derecho Universidad Católica de Colombia, correo electrónico: dccapera88@ucatolica.edu.co.

working conditions of sex workers, who have an uncertain pension future. , given that the “clandestinity” in which the majority exercises this profession generates uncertainty and if in many cases they are not linked to the health system, the probability that they will access the social security system in pensions is almost nil, either the Individual Savings with Solidarity or the Average Premium Regime, that is why, with the preparation of this degree work, the aim is to establish what legal guarantees sex workers can access, analyzing the jurisprudence of the Constitutional Court that has treated the working conditions of This population, likewise, seeks to analyze and establish the methods that could be used so that in the future they can access an old-age pension, this type of population that tends to remain is largely in a state of vulnerability.

Regarding the protection of basic rights of this type of worker, it is pertinent to carry out an analytical study of provisions issued by high courts such as the Colombian Constitutional Court and the Inter-American Court of Human Rights, in order to acquire a broader concept of due protection. in relation to the social security of people engaged in sexual services.

Key words

Sex worker, social security, old-age pension, work, fundamental rights.

Sumario

Introducción 1. Concepto de seguridad social y los regímenes pensionales existentes en colombia.2. regulación del trabajo sexual en colombia.3.Análisis comparado4.Análisis socio jurídico del trabajo sexual en Colombia.5.Conceptualización del o los regímenes pensionales aplicables a las trabajadoras sexuales.6.Conclusiones.

Introducción

El trabajo sexual ha sido tachado de inmoral por parte de la sociedad a lo largo de la historia, lo cual ha hecho que los prejuicios sociales eviten una evolución normativa concreta que permita regular las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, quienes tienen un futuro pensional incierto, dado que la “clandestinidad” en que la mayoría ejerce dicho oficio

genera una incertidumbre y si en muchos casos no están vinculadas al sistema de salud, es casi nula la probabilidad que accedan al sistema de seguridad social en pensiones, ya sea el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o el Régimen de Prima Media, es por ello que con la elaboración del presente trabajo de grado se busca establecer a que garantías legales pueden acceder las trabajadoras sexuales, analizando la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha tratado las condiciones laborales de esta población, de igual manera se busca analizar y establecer los métodos que podrían usar para que en un futuro puedan acceder a una pensión de vejez, este tipo de población que tiende a permanecer es gran parte en estado de vulnerabilidad.

En cuanto a la protección de derechos básicos de este tipo de trabajadoras, es pertinente realizar un estudio analítico de disposiciones emitidas por altos tribunales como la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para así adquirir un concepto más amplio sobre la debida protección con relación a la seguridad social de las personas dedicadas a los servicios sexuales.

De acuerdo con la pregunta de investigación planteada, es preciso mostrar brevemente que llamar trabajo a las actividades de connotación sexual ha sido desde siempre una discusión que abarca la índole social y jurídica, sin embargo, es raro el análisis que brinde un concepto concreto, lo que ha dejado a las personas dedicadas voluntariamente a estas actividades en un limbo jurídico, es decir no se les brindan garantías de seguridad social o en salud pertinentes. frente a lo cual Rubio (como se citó en Tirado 2011) afirma que:

Una vía legalista como la existente en países como Estados Unidos, que a lo largo de su historia ha discutido entre la legalidad o la prohibición, actualmente en su mayoría de estados presenta el Índice de Legalidad de la Prostitución ILP permitiendo observar las tendencias legislativas a nivel global, en las cuales las sociedades más liberales tendiendo hacia la legalización tienen un indicador cercano a 1, mientras que los países más restrictivos muestran un resultado cercano a 0. Según los resultados los países europeos muestran una tendencia predominantemente legalista, mientras países del oriente como China, Taiwán o Tailandia son primordialmente restrictivos (p.134).

Lo anterior es importante a la hora de abordar el tema frente al sistema legal nacional dado que las tendencias de legalización han sido usadas constantemente, como se afirma a continuación.

En el caso colombiano, en los últimos años se ha presentado una tendencia que se orienta hacia la legalización, especialmente en Bogotá, ciudad en la cual en los últimos años se ha comenzado a gestar una senda reglamentarista a través de múltiples decretos que han reconocido la existencia del fenómeno (Tirado,2011,p.133-134).

Un aspecto importante a tratar dentro del trabajo de grado a desarrollar es el papel de la mujer en el trabajo y en la seguridad social por lo que es importante conceptualizar como primera medida los regímenes pensionales existentes en Colombia:

El Sistema General de Pensiones en Colombia se compone de dos regímenes excluyentes entre sí(...) En el primero, los afiliados son titulares de una cuenta de ahorro individual en la cual se depositan sus aportes mensuales con los respectivos rendimientos y que es manejada por unas entidades financieras privadas denominadas administradoras de fondos de pensiones (afp).El rpm por su parte es un régimen en el que se constituye un fondo común de carácter público, al cual se dirigen las cotizaciones de los afiliados. Este fondo es administrado por Colpensiones, una empresa industrial y comercial del Estado².

Los cotizantes del rpm obtienen una renta vitalicia conforme a unos requisitos previamente definidos en la ley, de ahí que también se denomine régimen con prestaciones definidas. En especial, los cotizantes deben cumplir con los requisitos de la edad (62 años para los hombres y 57 años para las mujeres) y las semanas cotizadas (1300) para obtener una pensión (Farné y Rios, 2017, p.66).

Es importante resaltar que el trabajo sexual en Colombia es permitido, lo que se expresa en las palabras de Guerrero así:

² “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son entidades que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial de gestión económica según lo establece la normatividad del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la Ley” (Gómez,2017,p.3).

Colombia es un país que permite ejercer la prostitución siempre y cuando exista autonomía de la voluntad de la persona ejerce, sin embargo, no hay una regulación laboral específica que regule el tema, este capítulo pretende analizar la legislación que ha desarrollado nuestro país en torno a este tema. En primer lugar y en armonía con las teorías expuestas en el capítulo anterior se ha de indicar que en Colombia no se ha seguido de manera específica alguna de las tendencias regulatorias anteriormente expuestas, ya que como es bien sabido es un tema álgido que genera debate, discusión y sin lugar a duda controversia; sin embargo queda en evidencia que la Corte Constitucional, ha procurado en sus fallos seguir cierta tendencia abolicionistas con matices reglamentarios y prohibicionistas, al señalar lo siguiente:

El Derecho protege a quien ejerce la prostitución con medidas de salud pública, pero al mismo tiempo impone al Estado el deber de promover su erradicación y de rehabilitar a quien se desempeña como trabajador sexual (Gerrero,2017,p.33).

1. Concepto de seguridad social y los regímenes pensionales existentes en Colombia.

Para dar inicio con la explicación de los conceptos base de la presente investigación es pertinente abordar el concepto de seguridad social:

La seguridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales³, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. Este es un sistema que cubre

³ El riesgo laboral se diferencia de otros tipos de riesgos de trabajo porque lo que está en juego son cambios unilaterales en relaciones de trabajo previamente acordadas y en el caso extremo el empleo mismo. En términos generales puede definirse este tipo de riesgo como la propensión de que un evento (o cadena de eventos) de consecuencias negativas llegue a afectar las condiciones de incorporación y participación de los sujetos en el mercado laboral, o las condiciones en que dicha participación tiene lugar (Mosa,2003,p.651).

eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad laboral⁴, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar. (Ministerio de Trabajo, sf)

El sistema pensional en Colombia se encuentra dividido en dos regímenes, sobre los cuales los trabajadores pueden elegir el tipo de cotización que más se acople a sus necesidades estos son:

El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (rais) y el Régimen de Prima Media (rpm). En el primero, los afiliados son titulares de una cuenta de ahorro individual en la cual se depositan sus aportes mensuales con los respectivos rendimientos y que es manejada por unas entidades financieras privadas denominadas administradoras de fondos de pensiones (afp). El rpm es un régimen en el que se constituye un fondo común de carácter público, al cual se dirigen las cotizaciones de los afiliados. Las contribuciones a cualquiera de los regímenes son de carácter obligatorio para los trabajadores y empleadores. Los cotizantes del rpm obtienen una renta vitalicia conforme a unos requisitos previamente definidos en la ley, de ahí que también se denomine régimen con prestaciones definidas. En especial, los cotizantes deben cumplir con los requisitos de la edad (62 años para los hombres y 57 años para las mujeres) y las semanas cotizadas (1300) para obtener una pensión. Por el contrario, el rais es un sistema de contribuciones definidas, donde los aportes de los afiliados se relacionan de forma más directa a los beneficios obtenibles los cuales no son garantizados a priori. De hecho, el otorgamiento de la prestación depende de que la persona logre acumular un ahorro suficiente para financiar una pensión del 110 % del salario mínimo. En este régimen, la edad de jubilación se vuelve vinculante solo cuando el afiliado decide retirar todos sus ahorros —en el caso en que ellos, con sus respectivos

⁴ “La incapacidad laboral es la situación de pérdida de la capacidad laboral consecuencia de las limitaciones funcionales derivadas de enfermedad o lesión sobrevenida, por lo que está relacionada de forma primordial y directa con la pérdida de la salud (limitación funcional con impedimento laboral), ya que sin esta pérdida no cabría la determinación de una situación de incapacidad” (Vicente, 2015, p. 207).

rendimientos, no alcancen un monto suficiente para financiar una pensión mínima— o solicite hacer efectiva la garantía de pensión mínima. (Farne y Ríos, 2017).

Para darle síntesis a la conceptualización realizada anteriormente sobre las opciones de acceso a pensión de vejez en Colombia, cada persona tiene derecho de elegir el régimen que considere adecuado a su situación laboral y financiera, para el tema tratado en el presente artículo es preciso señalar que legalizar los oficios de carácter sexual ayudaría a que un amplio número de personas accediera a una vejez digna, así como brindar protección en caso que su fallecimiento a los miembros de su familia brindándoles acceso a una pensión de sobrevivencia. Como conclusión se puede decir que el acceso a una pensión de vejez es una forma de dignificación tanto para el futuro de quien ejerce un trabajo u oficio como para su familia en caso de que este faltara.

2. Regulación del trabajo sexual en Colombia.

En Colombia en materia legislativa, con miras a la regulación del trabajo orientado a la prestación de servicios de carácter sexual, lo más cercano que se ha estado a la materialización de una norma fue el proyecto de ley 079 presentado en el año 2013, por el senador Armando Benedetti, cuyo objetivo era:

Esta ley tiene como propósito establecer medidas para garantizar la dignidad de las personas que ejercen la prostitución no forzada, a partir del reconocimiento de sus derechos como sujetos de especial protección constitucional, establecer acciones afirmativas en su favor, y delimitar conductas de los establecimientos comerciales dedicados a la prestación de servicios vinculados a esta actividad. (Benedetti, 2013, p.2)

La intenciones plasmadas en el proyecto de ley, están encaminadas a dignificar de alguna manera ese tipo de actividad económica⁵, buscando que el acceso a prestaciones

⁵ Pese a la estigmatización social de esta actividad, el trabajo sexual se configuró fuera de la legalidad económica como una estrategia de sobrevivencia para muchas mujeres vulneradas socioeconómicamente, sin embargo, cada vez más este concepto se aleja de la asociación con la extrema pobreza, configurándose como una rentable alternativa para muchas mujeres excluidas del mercado de trabajo formal. De este modo, el trabajo sexual presenta características de informalidad

sociales tales como salud y pensión, pero al ser llevado a la práctica muchas trabajadoras sexuales consideran que las regulaciones establecidas omitían a las trabajadoras sexuales que no están vinculadas a una relación de subordinación y que en muchos casos no acceden voluntariamente a las prestaciones laborales por distintos factores.

En una entrevista realiza a Fideliza Suarez, presidenta de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad (Asmubuli), expresa que: El problema con ese proyecto es que fue hecho por personas que no conocen el tema. Son muchas las compañeras que ejercen su oficio en parques o en la calle, ¿quién les va a dar contrato a ellas? Aquí se evidencia una clara falta de coordinación entre el legislador y las personas que se dedican a ese tipo de actividades, dejándolas en un limbo legal (El Tiempo, 2014).

El proyecto de ley abarcaba los siguientes puntos:

- a. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la garantía de todos los derechos del Código Sustantivo de Trabajo.
 - b. No ser re-victimizadas, ni violentadas verbal o físicamente por parte de sus empleadores, clientes, usuarios y otros trabajadores.
 - c. Vacunas gratuitas contra infecciones de transmisión sexual y actividades de promoción y prevención de enfermedades.
 - d. Ejercer la prostitución en las condiciones, sitios, horarios y zonas definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial.
 - e. Los clientes deben tratar dignamente a las trabajadoras y abstenerse de contratar a quienes estén siendo víctimas de explotación sexual.
 - f. Los establecimientos deben obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría Distrital o Municipal de Salud.
- Como se puede ver, a pesar de ser un proyecto que promueve la protección de los derechos humanos de los trabajadores sexuales y procura reglamentar el ejercicio de la prostitución en Colombia, no ha tenido a la fecha avance. Dicho proyecto llegó a primer debate y fue a plenaria en el Congreso, intereses particulares de diferentes sectores han hecho meya, han generado que

laboral, en tanto, es una actividad económica que no es reconocida ni protegida dentro de los marcos jurídicos y normativas laborales establecidos. Las condiciones de empleo y de trabajo en que se desempeña el trabajo sexual no cuentan con ninguna garantía laboral establecida para sus trabajadoras, configurándose sistemas de organización del trabajo fuera de toda normativa y que profundizan la precariedad laboral histórica de esta actividad (Calderon,2012,p.45).

no prospere el proyecto, generando hoy por hoy una ausencia normativa de dicha situación. (Guerrero, 2017, p.25)

Es importante resaltar que dentro de un proyecto de ley que busca el bienestar de una población vulnerable y socialmente marginada, es necesario contar con una investigación sobre el entorno socio económico y las condiciones de vida de estas personas, como lo sugieren en la entrevista citada, además de plantear métodos informativos sobre los programas de apoyo laboral y pensional y las formas de acceder a ellos, como primera medida para ir dignificando este oficio.

Por otra parte, jurisprudencialmente La Corte Constitucional se ha pronunciado en materia laboral respecto al trabajo sexual así:

falla en su esfuerzo por interpretar parte de la realidad que circunda la prostitución, pues, si bien es cierto que puede ser considerada una actividad económica que merece toda la protección como parte del derecho a la libertad de optar por un trabajo “libremente escogido o aceptado”, es igualmente cierto que muchas personas no tienen libertad de opción laboral, sino que se ven obligadas a traficar con su cuerpo en respuesta a un típico estado de necesidad. Es muy fácil defender el derecho de hombres y mujeres a prostituirse, pero es muy complejo sacar a estas personas de la prostitución cuando llegan a ella por tal estado. Creemos que la indiferencia que se quiso evidenciar con la imagen al inicio del texto es la misma que existe en la decisión de la Corte Constitucional. (Corte Constitucional, T-269 .2010)

En la sentencia citada la Corte Constitucional se observa:

A la mujer como madre y cabeza de familia, por tanto se hace énfasis en la protección y estabilidad laboral reforzada⁶ que ostenta ésta, tanto en estado de embarazo o lactancia,

⁶ Dentro del grupo de principios enunciado en el Art. 53 de la Carta encontramos, Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Sin embargo, de acuerdo al problema

donde el Estado es garante de los derechos en especial de la dignidad humana, es imperativo que haga efectivo el trabajo como principio, derecho, deber y libertad. Toda persona sin importar su ocupación debe ser partícipe de las oportunidades que ofrece el desarrollo en ejercicio de sus capacidades y condiciones especiales; así las cosas, se analiza si la labor de una trabajadora sexual en un establecimiento de comercio cumple los requisitos legales necesarios en un contrato laboral para ser amparada dicha actividad y garantizar así sus derechos. (Guerrero, 2017, p.25)

Al respecto Borbón (como lo comenta Misael Tirado, 2011) piensa que frente a los tratamientos jurídicos de la prostitución, existe un grupo diverso de actividades legales e ilegales que, de manera general, se asocian a la problemática del comercio sexual: “la prostitución, el trabajo sexual/erótico, el turismo sexual, la explotación sexual de adultos, la pornografía infantil/adulta y la trata de personas con fines sexuales, lo cual de entrada, dificulta la comprensión del fenómeno, al estar como se ha dicho, en los planos de la legalidad e ilegalidad, desde lo cual se derivan aspectos como el tipo de cliente que accede a estos servicios por nombrar solo uno de ellos. (Borbon,2018,p.10-11)

De las anteriores conceptualizaciones se entiende que existe una preocupación por regular las actividades enfocadas en la prestación de servicios sexuales, pero no hay una estructura que se ocupe de que las personas dedicadas a este tipo de labor realicen un ahorro para su vejez como lo hace cualquier otro trabajador sea subordinado o independiente.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 25 expresa que “El trabajo es una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Const., 1991). La disposición anterior trae como consecuencia plantear el siguiente interrogante: ¿La prostitución es un trabajo?

planteado en la presente investigación se hará alusión únicamente al principio de estabilidad laboral. Así mismo, de manera amplia se abordará el principio de protección especial a la mujer y a la maternidad. (Cerquera,2018, p.25)

Para dar respuesta a la pregunta planteada necesaria para resolver el problema jurídico principal, es preciso analizar si la población base de este análisis enfocado en la situación laboral y de seguridad social, realizan una profesión, arte u oficio, en la constitución colombiana en el artículo 26 de determina que los ciudadanos son libres de elegir su profesión u oficio, lo que claramente conlleva a que las personas dedicadas al trabajo sexual sean deban ser amparadas de una forma igualitaria dado que se dedican a un oficio de acuerdo con el concepto establecido por la Corte Constitucional:

La Constitución (art. 26) otorga al Congreso de la República la facultad de exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de ciertas actividades y establece, como regla general, la inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones por parte de las autoridades competentes. Lo anterior, en razón a que el constituyente supone que (i) las profesiones comportan una necesaria formación académica como garantía de aptitud para la realización de la actividad profesional, reduciéndose de esta manera el riesgo social que puede implicar su ejercicio, y que (ii) las ocupaciones, artes y oficios que no impliquen un riesgo social, no requieren por lo general una especial formación académica, aun cuando también es posible imponer reglamentación, inspección, vigilancia y cierta escolaridad. Así las cosas, observa esta Corte que el ejercicio de una profesión u oficio se funda en el respeto a la libertad individual de escogencia de una actividad laboral y en la protección de los riesgos sociales⁷ que, por su posible incidencia, exigen del legislador una regulación que, para que sea legítima, deberá ser razonable y proporcionada, de manera que no signifique una restricción arbitraria e inequitativa al ejercicio de tales actividades individuales. (Corte Constitucional, C-568.2010)

En a manera de conclusión es preciso señalar que las y los trabajadores dedicados a actividades de carácter sexual ejercen un oficio dado que no es necesaria una formación formal para su ejercicio, de igual manera al ser un derecho de carácter constitucional la elección de actividad laboral es preciso señalar que así como quienes ejercen una profesión

⁷ El concepto de riesgo social fue introducido por el Banco Mundial en el año 2000 bajo el esquema de Gestión del Riesgo Social (SRM: Social Risk Management), como enfoque alternativo para evaluar y desarrollar instrumentos de protección social que prevengan la ocurrencia de situaciones negativas o que mitiguen sus efectos (Otto, Castela, Massot y Eriz, 2014, p.33).

regulada en su totalidad esta población merece las garantías laborales y de seguridad social como lo es el acceso a una pensión.

Ahora bien, como se expresó en una entrevista a una de las líderes de las mujeres que ejercen la prostitución, muchas de ellas realizan dicho oficio de manera independiente sin una subordinación, lo que no genera la existencia de un contrato laboral, por lo que informar sobre las formas de cotización en pensión debe ser parte de una política pública enfocada en la igualdad y la dignidad.

La importancia de informar sobre los regímenes pensionales a una población cuya situación laboral no es favorable para perseguir los estándares de dignidad que persigue el derecho laboral es vital para darle validez y llevar a la práctica conceptos como el siguiente:

La definición del carácter de trabajo que encierra el trabajo sexual, nos permite profundizar en la relación de trabajo que ahí se establece. En el caso del trabajo sexual que se ejerce en ámbitos de dependencia y subordinación laboral podemos decir que se configura una relación salarial. En tanto una trabajadora vende su fuerza de trabajo, medida en tiempo y a cambio de un salario, a un empleador, quien se apropia del producto del trabajo realizado por la trabajadora. Pese a esto, estas características no son reconocidas por la legislación laboral, desconociendo el carácter de trabajadora de las mujeres que laboran en estas condiciones de trabajo (Rodríguez, 2012, p.46).

Lo anterior va muy ligado a dignificar las condiciones de trabajo de una población socialmente opacada y mantenida al margen de los derechos y estándares mínimos para el acceso a garantías futuras mínimas, es decir acceder a una pensión de vejez.

De igual manera en una relación de subordinación debe obligarse a quien ejerce la relación como empleador a velar por que sus trabajadores(as) accedan a todos los beneficios laborales, lo que no solo generaría la legalización de este oficio sino también la dignificación de las personas que han decidido mantenerse económicamente de esta manera, enfocándose en generar lo que bien puede llamarse una acción afirmativa sobre un grupo históricamente marginado dentro del estándar del derecho laboral.

3. análisis comparado.

Es importante resaltar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales en otros países para verificar que aspectos podría reforzar Colombia para que las personas dedicadas a este tipo de actividades puedan acceder a más garantías laborales, que proyecten un futuro más prometedor cuando lleguen a una edad avanzada, para iniciar con este análisis se procede a dar explicación .

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ocupó al fin de las trabajadoras sexuales aunque no fue por medio de un convenio o una recomendación, realizó un informe con el fin del exhortar a los gobiernos a reconocer oficialmente la industria de la prostitución. El organismo internacional no está guiado únicamente por la defensa de los derechos de las trabajadoras, sino por la posibilidad que tienen los estados de recaudar impuestos, por derecha, a quienes manejan esa próspera actividad. Este informe de la OIT toma como base el rápido crecimiento del comercio sexual en los países del sudeste asiático, donde el negocio representa entre el 2% y el 14% del Producto Bruto Interno en las economías de esas naciones. En este, la OIT no solicita la legalización o reglamentación de la prostitución, pero advierte sobre las ventajas de reconocerla como actividad económica para extender la base tributaria y cubrir muchas de las actividades lucrativas asociadas con ellas. (Jaramillo, 2013, p.16)

Lo anterior más que una sugerencia para incentivar el crecimiento económico de una nación, el abre bocas para que el grupo poblacional base de la presente investigación tenga acceso a garantías laborales, para mostrar cómo estas recomendaciones no son tenidas en cuenta de la forma adecuada a continuación se señala el caso de España en donde el sistema abolicionista predomina en el tratamiento de las trabajadoras sexuales.

Las trabajadoras sexuales forman una parte muy importante de esos sectores excluidos. El propio hecho que no sea reconocida su calidad de trabajadoras las excluye de participar en las decisiones que les conciernen en cuanto tales, teniendo vedada (o, como mínimo, fuertemente condicionada y/o limitada por tal circunstancia) la posibilidad legal de sindicarse y de exigir derechos laborales aplicables a su sector. Asimismo, y toda vez que el 75,55% de ellas son extranjeras,

tampoco pueden ejercer derechos políticos, no pudiendo votar ni ser elegidas para ocupar cargos de esta índole.

Sin perjuicio de ello, el 11,11 % de nuestras entrevistadas manifestaron haber participado esporádicamente en colectivos y movimientos sociales, en eventos reivindicativos, en asociaciones de inmigrantes, en manifestaciones contra la discriminación. El 2,22% participa habitualmente en colectivos de defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo y en el movimiento de reivindicación de derechos para este sector, mientras que el 4,44 % ha participado como voluntaria en entidades de apoyo al colectivo de trabajadoras sexuales, como mediadoras y como agentes de salud. (Heim, 2007, p.68)

Tomando como referente una legislación menos similar a la nuestra y con enfoque más garantista, se toma a Holanda como ejemplo para explicar como un estado abolicionista puede pasar a la garantista, al posicionar a las trabajadoras sexuales como sujetos de derecho y no como simples víctimas o personas inmorales que hay que ocultar de la vista de todos.

Se legalizó la explotación de la prostitución voluntaria en octubre del año 2000 con la eliminación del artículo 250 bis del Código Penal, más conocido como ‘la prohibición de los prostíbulos’. De este modo, el gobierno holandés optó por no continuar con una política de tolerancia, pero sí regular en lo sucesivo el sector de la prostitución a nivel municipal (...) Al modificar la ley en octubre de 2000, el gobierno de Holanda distinguió entre la prostitución voluntaria y la prostitución involuntaria. A través de la legalización de la prostitución voluntaria, el gobierno la reconoce como una profesión. Uno de los objetivos de la modificación de la ley era proteger la posición de la prostituta. Desde entonces, el derecho laboral sería aplicado al sector. (Wegener, 2011, p.1-28)

Por su parte en el contexto latinoamericano son pocos los países que buscan que el abolicionismo no sea una forma de vulneración automática de derechos laborales como en el caso de Uruguay:

El presidente del BPS⁸, Ernesto Murro, informó que aquellos trabajadores y trabajadoras sexuales que se afilien al BPS como una empresa unipersonal podrán acceder a: jubilación, pensión, asignaciones familiares, atención de salud para ellos/as y sus hijos/as, así como prestaciones en caso de enfermedad y discapacidad, así como lentes y otros beneficios, cumpliendo las condiciones en cada caso.

Se consideran trabajadores y trabajadoras sexuales a quienes siendo mayores de 18 años ejercen el trabajo sexual recibiendo a cambio una remuneración en dinero o especie.

Para acceder a los beneficios deben estar registradas/os en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y autorizadas/os a ejercer esa tarea dentro de las disposiciones reglamentarias existentes. (Archivo presidencia de Uruguay,2010)

La aplicación de las normas laborales para las personas que se dedican a la prestación de servicios de carácter sexual es fundamental dado que al igual que cualquier otra persona que trabaja por una remuneración para cubrir necesidades básicas como alimentación, también es necesario que obtengan recursos para que cubran gastos de salud, así como la posibilidad de tener el derecho de llevar una vejez digna como cualquier otra persona que a lo largo de su etapa productiva ahorra para jubilarse, para señalar la importancia de este aspecto es fundamental mostrar como en lugares como India hay estudios que demuestran que la prostitución es un movimiento económico capaz de mantener familias enteras y aun así ser uno de los grupos poblacionales más discriminados y marginados:

After analysing the paradigm of morally addressing sex workers, it is viable to examine the practical spectrum of things in India. Violation of the basic human rights of expression and dignity is particularly prevalent in the lives of people involved in sex work. Discrimination against sex workers in India is not like discrimination faced by other marginalized groups along lines of caste, class, race, or religion. It is probably one of the most horrendous and unjust treatments of a certain group of individuals. Sex work is not treated as work, but as a dirty, immoral lifestyle, which poses a threat to the general

⁸ Banco de Previsión Social.

public. The result of this stigma is a denial of basic rights for both sex workers and his/her families, who are dependent on the money earned through sex work. Constitutional safeguards and other statutes that protect civil liberties and political rights of all individuals only apparently protect the rights of sex workers, in the Indian context Illiteracy and poverty are the primary factors responsible for women to look for avenues for sustainability and to enter, the labour market at early ages. Such labour markets vary from hard physical-chores to human trafficking. Sex work was found to be one of several options available to women in the labour market. Most of the women who enter sex work come have a history of very poor incomes in other labour markets; the median value of incomes in most of the jobs ranges from of Rs. 500 to 2000 (USD \$ 7-29) per month.(Banerji,2018,p.67-68)⁹

4. Análisis socio jurídico del trabajo sexual en Colombia.

⁹ Después de analizar el paradigma de abordar moralmente a las trabajadoras sexuales, es viable examinar el espectro práctico de las cosas en la India. La violación de los derechos humanos básicos de la expresión y la dignidad es particularmente frecuente en la vida de las personas involucradas en el trabajo sexual. La discriminación contra las trabajadoras sexuales en la India no es como la discriminación que enfrentan otros grupos marginados en cuanto a casta, clase, raza o religión. Es probablemente uno de los tratamientos más horribles e injustos de cierto grupo de individuos. El trabajo sexual no se trata como un trabajo, sino como un estilo de vida sucio e inmoral, que representa una amenaza para el público en general. El resultado de este estigma es la negación de los derechos básicos tanto para las trabajadoras sexuales como para sus familias, quienes dependen del dinero ganado a través del trabajo sexual. Las garantías constitucionales y otros estatutos que protegen las libertades civiles y los derechos políticos de todas las personas aparentemente solo protegen los derechos de las trabajadoras sexuales. El trabajo sexual como un trabajo alternativo en el contexto indio El analfabetismo y la pobreza son los principales factores responsables de que las mujeres busquen vías para la sostenibilidad e ingresen al mercado laboral a edades tempranas. Dichos mercados laborales varían desde tareas físicas difíciles hasta la trata de personas. Se descubrió que el trabajo sexual es una de las varias opciones disponibles para las mujeres en el mercado laboral. La mayoría de las mujeres que ingresan al trabajo sexual tienen antecedentes de ingresos muy pobres en otros mercados laborales; El valor medio de los ingresos en la mayoría de los trabajos varía de Rs. 500 a 2000 (USD \$ 7-29) por mes.(Traducción propia)

Para iniciar con el análisis socio jurídico de la prostitución en Colombia es importante señalar que existen tres corrientes que puede seguir un estado a la hora que expresarse sobre la regulación de la prostitución, estos son el prohibicionismo, reglamentarismo y el abolicionismo:

Los enfoques jurídicos tradicionales para la comprensión y normatización de la prostitución han sido: el prohibicionismo, el reglamentarismo y el abolicionismo. En el primero la prostitución se considera un delito, la mujer que la ejerce es una delincuente; en el segundo, se le considera un mal necesario; y en el tercero una especie de esclavitud, la mujer que la ejerce es una víctima de las condiciones sociales. El abolicionismo es el discurso jurídico hegemónico y dominante, dada su fuerza y su contenido ideológico condiciona la mirada y la comprensión de otras disciplinas, incluida la psicología. En estos tres enfoques no se reconoce la prostitución como un trabajo. En el discurso hegemónico y dominante –abolicionista- la prostituta es considerada una esclava moderna, explotada ilegalmente, víctima de las circunstancias socioeconómicas y cuya consciencia se encuentra alienada. En consecuencia, aunque considere que ha elegido voluntariamente ocuparse en ello; no se le reconoce su decisión y se considera que es necesario protegerla y rehabilitarla. La prostitución voluntaria implica una valoración de las alternativas laborales posibles y está determinada por los significados que atribuyen a cada una de ellas (Pachajoa y Figueroa, 2008, p.66).

El reglamentarismo es una forma de garantizar derechos laborales a las trabajadoras sexuales, dado que es importante que un estado sea garante de la igualdad entre ciudadanos, y la igualdad en materia laboral y pensional, ya que lo más razonable es que toda persona que recibe una remuneración a cambio de la prestación personal de un servicio acceda a beneficios específicos de seguridad social, ya sea que su trabajo sea hecho bajo subordinación o de manera independiente.

Para brindar una perséctica jurídica de los oficios de carácter sexual como una posibilidad de empleo si se hace dentro de estándares legales mínimos es necesario resaltar que la voluntad es vital, ya que muchas personas optan por este tipo de actividad diversas investigaciones señalan:

Que las mujeres que se dedican a la prostitución han tenido otros empleos, sin embargo, la prefieren por sobre otros trabajos de bajo prestigio social, bajos ingresos, alta demanda de tiempo y esfuerzo físico. Una de las razones por las cuales la prostitución no ha sido reconocida como trabajo es porque sobre ella pesan la estigmatización, la desvalorización y la especialización. Es decir, a la prostituta se le considera diferente e indigna de aceptación social, a la vez que se produce un resbalamiento conceptual en el que se confunde lo que se hace con lo que se es. Esto hace suponer que la prostituta no es una trabajadora, sino una persona con una particular configuración social, emocional y psíquica (Ibid).

En el contexto nacional hay diversos estudios que respaldan lo expuesto anteriormente, un claro ejemplo de ello es el reportaje realizado en Bogotá por la Universidad Libre en donde se resaltan cifras y el impacto de la jurisprudencia constitucional sobre la actividad sexual:

En estudio reciente realizado por la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se registra un censo de 23.426 mujeres dedicada a la prostitución y se estima que los hombres que desarrollan esa actividad representan entre un 10 y un 15%, respecto de esa población, es decir, que la población total que desarrolla esa actividad como trabajo en la ciudad de Bogotá, se estimada en 26.000 personas que ejercen la prostitución, bien en la calle o en cerca de los 500 establecimientos en los que se adelanta esa actividad e identificados por la administración distrital.

La prostitución es un fenómeno social que no se encuentra regulado de manera taxativa por la legislación colombiana, regido hasta el momento por el principio, ya enunciado que afirma que “lo que no está prohibido está permitido”, en la medida que la ley colombiana no hace referencia alguna a esta prohibición. Sin embargo, hay normas que regulan algunos aspectos paralelos al fenómeno, tales como: la configuración de ciertos tipos penales, la convivencia ciudadana, el plan de ordenamiento territorial, entre otras. En este orden de ideas, la prostitución se ha visto determinada por algunas normas y jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, de alguna manera no para proteger a las personas que realizan esta actividad, sino para imponerle cargas y discriminaciones

negativas, con la salvedad en materia laboral en la sentencia T629 de 2010. (Jiménez y obregón, 2017, p.17)

Para cerrar el presente acápite es importante resaltar que la voluntad y las condiciones socioeconómicas son fundamentales para comprender que el trabajo sexual debe ser regulado desde el ámbito de la seguridad social para que quienes lo ejercen puedan acceder a los beneficios jurídicos a los que cualquier trabajador tiene acceso, desde políticas públicas que informen y sobre todo le brinden dignidad a estas personas, de acuerdo a esto en el siguiente tema a tratar se dará explicación a los regímenes pensionales existentes en Colombia.

5. Conceptualización del o los regímenes pensionales aplicables a las trabajadoras sexuales.

Para dar inicio al acápite que brindara una respuesta a la pregunta de investigación planteada, es necesario sintetizar el funcionamiento del sistema pensional colombiano y las dos opciones de afiliación que este ofrece a todos los trabajadores tanto subordinados como independientes:

La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes (literal a. del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003).

La selección de uno de los regímenes previstos en la ley es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes. (Literal c. del artículo 13 de la Ley 100 de 1993). Una vez efectuada la selección inicial de un régimen, solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial, siempre y cuando el afiliado le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez (literal e. del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003).

En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el artículo 12 de la ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago de una pensión mínima (literal h. del artículo 13 de la Ley 100 de 1993). (Franco, Alarcón, Oquendo y Loaiza, 2015, p.83)

Al analizar con brevedad el sistema pensional, se puede evidenciar que el Estado busca que las personas obtengan una jubilación que les garantice un mínimo vital en su vejez, pero para acceder a estos beneficios tanto las empresas como los trabajadores deben llenar unos requisitos burocráticos ante las entidades encargadas de realizar las respectivas afiliaciones, por lo tanto deben tener un mínimo de ingresos, de igual manera el sistema nacional de pensiones proporciona una alternativa para aquellas personas que no alcanzan a devengar un salario mínimo legal mensual vigente debido a la misma informalidad del trabajo, por ello en Colombia existen los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), este programa consiste en:

Un ahorro voluntario diseñado para proteger a las personas a quienes sus recursos no les alcanzan para cotizar a pensión.

Las personas que ahorran en BEPS, construyen el capital que les permitirá disfrutar en su vejez de un ingreso económico de por vida. El programa es flexible y permite a los ciudadanos ahorrar de acuerdo a sus capacidades económicas de manera diaria, semanal o mensual. (Colpensiones, 2017).

De acuerdo con lo anterior y a manera de aporte del presente trabajo investigativo es pertinente que las entidades reguladoras del trabajo y de las pensiones en Colombia creen programas pedagógicos para toda la población dedicada a la provisión de servicios sexuales ya sea de manera independiente o que son vinculadas por parte de una entidad dedicada al entretenimiento de manera no forzosa, se adhieran a los sistemas pensionales de acuerdo al monto de ingresos mensuales promedio que puedan adquirir para que en un futuro esta población dado que la misma constitución ampara el acceso a la seguridad social como derecho fundamental.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la

cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. (Constitución política de Colombia,1991,artículo 48)

Es importante resaltar que así como las ciudades realizan brigadas de concientización para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual, es importante evitar la propagación de la vejez indigna, evitando que por prejuicios sociales y falta de información un amplio número de personas y en su mayoría mujeres queden en el desamparo total por no haber sido tenidas en cuenta por el sistema de seguridad social en pensiones.

Hay que tener en cuenta que la prostitución en todas aquellas manifestaciones y tipologías que se caracterizan por su carácter marginal y por tener una serie de problemáticas asociadas -enfermedades de transmisión sexual , drogadicción , problemáticas asociadas a los hijos, problemáticas asociadas a la vejez, ausencia o escasez de recursos económicos, problemas de salud, u otras situaciones problemáticas a nivel personal y social- necesita de una intervención que posibilite no sólo la inclusión social sino también la resolución de todas estas problemáticas sociales.(Orte y March, 1998,p.86)

Es decir que la inclusión es uno de los estándares más importantes que el Estado a nivel de seguridad debe tener en cuenta para que todas las personas que se dedican a una labor remunerada accedan a alguno de los regímenes pensionales de su preferencia y que se acomode al nivel de ingresos de las trabajadoras sexuales.

Conclusiones

Al hablar de una población vulnerable y susceptible a efectos negativos del entorno en que se desarrolla, las trabajadoras sexuales, en muchos casos no tienen acceso a las garantías mínimas que los demás trabajadores obtienen tras prestar un servicio personal, dado que esta labor carece de regulación en Colombia, por esta razón este trabajo de investigación se basó en señalar la falta de legislación para regular las relaciones laborales de las

trabajadoras sexuales, teniendo en cuenta que el intento que tuvo su caída en el Congreso entre 2013 y 2014.

Como se evidencio al inicio de la investigación el proyecto de ley 079 de 2013, era una opción buena para regular y efectuar la vinculación de las trabajadoras sexuales pero el proyecto no contemplaba en su totalidad la situación real en las calles de las trabajadoras sexuales, quienes en muchos casos lo hacen de, manera independiente o puede que estén siendo obligadas a ejercer ese tipo de actividad, lo que muestra una clara falta de intervención estatal, es decir que dicho proyecto de ley estaba alejado de la realidad practica del oficio lo que hace que acceder a uno de los modelos pensionales, lo que genera una grave discriminación entre una población conformada en su gran mayoría por sujetos de especial protección constitucional (mujeres).

A manera de aporte este trabajo de investigación finaliza señalando la importancia de generar espacios o políticas pedagógicas que faciliten el acceso de las trabajadoras sexuales a alguno de los regímenes pensionales, sea el régimen de ahorro individual o el régimen de prima media, es decir que al permitir que estas personas sean tomadas en cuenta como trabajadoras, al hacer esto el estado crearía un registro tanto de empleadores como de las subordinadas, lo que generaría una dignificación del trabajo y el ofrecimiento del derecho fundamental a la igualdad de todas aquellas personas dedicadas a este oficio que históricamente ha sido tachado pero que a pesar de todo continua siendo parte de las sociedades.

Referencias

- Banerji V. (2018). *Estado y recursos de las trabajadoras sexuales: una perspectiva india*. Novum Jus, 12(2), 63-82. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2018.12.2.4>
- Borbón Torres, S. D. (2018). *Tratamiento normativo y jurisprudencial del trabajo sexual en Colombia frente al condicionante histórico-social de vulneración de derechos*. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16065/1/Tratamiento%20normativo%20y%20jurisprudencial%20del%20trabajo%20sexual%20en%20Colombia.pdf>.

- El Tiempo.(2014).*La trabajadora sexual que pide la palabra en el Congreso*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14674825>.
- Calderon, M. (2012). *¿El trabajo dignifica al hombre o la persona humana dignifica al trabajo?*. Volumen (III),1-14. Trama. Revista de Tecnología, cultura y desarrollo. Recuperado de <https://revistas.tec.ac.cr/index.php/trama/article/view/1082/1204>.
- Cerquera, S. (2018). El principio de estabilidad laboral en Colombia: La tensión entre los derechos sociales laborales vs las políticas neoliberales de flexibilización (Tesis de grado).Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <http://bdigital.unal.edu.co/61930/1/530018202018.pdf>.
- Corte Constitucional. Sentencia T-629 de 2010, sala tercera (3ra) de revisión. MP. Juan Carlos Henao Pérez.
- Farne, S., & Ríos Arredondo, P. (2017). *La protección de las mujeres en su vejez. Páginas De Seguridad Social, 1*(2).Recuperado de <https://doi.org/10.18601/25390406.n2.03>.
- Franco Alarcón, Paola Andrea, Oquendo, Tatiana María, & Berrio Loaiza, Carlos Mario. (2015). *Posibles perspectivas del sistema de pensiones en Colombia: análisis desde el sistema pensional chileno*. *Revista CES Derecho*, 6(1), 79-93. Retrieved April 02, 2020.Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-77192015000100007&lng=en&tlng=es.
- Gómez, E. (2017). Empresas industriales y comerciales del estado frente contratos mercantiles contemporáneos (Tesis de pregrado). Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Recuperado de <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3462/EMPRESAS%20INDUSTRIALES%20Y%20COMERCIALES.pdf?sequence=1>
- Guerrero Ordóñez, D. (2017). *El ejercicio de la prostitución como trabajo sexual: implicaciones sociales y régimen jurídico*. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15807/1/EL%20EJERCICIO%20>

ODE%20LA%20PROSTITUCI%C3%93N%20COMO%20TRABAJO%20SEXUAL.pdf.

Heim, D.(2007). *Prostitución y exclusión social informe de investigación*. Surt. Barcelona. Recuperado de <https://www.fbofill.cat/sites/default/files/1557.pdf>.

Jaramillo Jimeno, Satephanie. (2013). *Derechos y deberes de los trabajadores sexuales en Colombia*. -El caso de Salomé.Universidad ICESI.Recuperado de https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77597/1/derechos_deberes_trabajadores.pdf.

Jiménez Martin,H & Obregon Cubillos, J.(2017). *EL concepto de trabajo sexual y los efectos de la sentencia t-629 de 2010 en las localidades de Chapinero, Santa fe, Mertures y Kenedy de la ciudad de Bogotá 2016*.Universidad Libre.Bogotá D.C. Recuperado de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11044/EL%20CONCEPTO%20DE%20TRABAJO%20SEXUAL%20Y%20LOS%20EFECTOS%20DE%20LA%20SENTENCIA%20T-629%20DE%202010%20EN%20LAS%20LOCALIDADES%20DE%20C.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Ministerio de Trabajo. (s.f). *¿Qué es la Seguridad Social?*. Recuperado de <https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-proteccion-del-empleo/que-es-la-seguridad-social>.

Mosa, M. (2003) El riesgo laboral en tiempos de globalización. Volumen (XXI),643-665.Colegio de México. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/598/59806306.pdf>.

Orte, C & March, C. (1998).*Hacia un modelo de intervención socieducativa sobre la prostitución. La prostitución como objeto de la Pedagogía de la Inadaptación Social*. Departamento de Ciencias de la Educación de la Universitat de les Illes Balears. Recuperado de <file:///C:/Users/User/Downloads/144009-Text%20de%20l'article-412276-1-10-20150710.pdf>.

- Otto, E., Castelao, M., Massot, J., Eriz, E. (2014). Riesgo social: Medición de la vulnerabilidad en grupos focalizados. Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/462/46230868003.pdf>.
- Pachajoa Londoño, Alejandro, & Figueroa García, Jhonny Alexander (2008). *¿Es la prostitución un trabajo?*. Tesis Psicológica, (3), 54-69. [fecha de Consulta 3 de Abril de 2020]. ISSN: 1909-8391. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1390/139012667007>.
- Rodríguez, G. (2012). Trabajadoras sexuales: Relaciones de trabajo invisibilizadas. Universidad de Chile. Recuperado de <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116379/TESIS.pdf>.
- Rubio, M. (2010). Viejos verdes y ramas peladas: Una mirada global de la prostitución. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Recuperado de https://books.google.com.co/books?id=0A3vTQKeBvEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Tirado Acero, Misael. (2011). El debate entre prostitución y trabajo sexual: Una mirada desde lo socio-jurídico y la política pública. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 6(1), 127-148. Retrieved April 02, 2020, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-30632011000100007&lng=en&tlng=es.
- Salazar, E. (2011). Cobertura y acceso a la garantía de pensión mínima en el sistema de pensiones colombiano. Volumen (12), 491-420. Universidad Javeriana. Recuperado de [file:///C:/Users/User/Downloads/3101-Texto%20del%20art%C3%ADculo-10955-1-10-20120802%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/3101-Texto%20del%20art%C3%ADculo-10955-1-10-20120802%20(1).pdf).
- Vicente Pardo, José Manuel. (2015). *La Incapacidad laboral como indicador de gestión sanitaria*. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 61(239), 207-219. <https://dx.doi.org/10.4321/S0465-546X2015000200007>.

Wegener, L. (2011). *Asomo de esperanza o mala luz La prostitución en los Países Bajos: política e imágenes en la prensa*. Universidad de Utrecht, Facultad de Humanidades

Supervisora: Dra. Ellen-Petra Kester. Recuperado de
file:///C:/Users/User/Downloads/Asomo%20de%20esperanza%20o%20mala%20luz
. %20La%20prostitucion%20en%20los%20Paises%20Bajos.pdf.